

El reto de reconstruir la convivencia en Euskadi

Pedro Luis Arias Ergueta *

La reconstrucción y revitalización de la convivencia en Euskadi pasa por relativizar posibles visiones tremendistas y supuestos inalcanzables y por evitar la desmemoria, y cicatrización en falso de las heridas causadas. Requiere y exige abandonar toda cobertura a la violencia de ETA, así como reconocer públicamente el desamor y el olvido sufridos por las víctimas del terrorismo etarra y, no menos, por debilitar pulsiones identitarias que sacralizadas nos alejan de la reconciliación y del perdón.

—¿Para qué tocar las heridas?
Alguien responde:
—Para qué va a ser, para curarlas.
Y la mujer añade:
—¿Pero quién se atreve?¹

Algunas reflexiones iniciales

Una convivencia armónica es siempre un proceso y no tanto una meta alcanzable. En las sociedades postmodernas occidentales presenta muy variadas patologías, muchas de ellas originadas por la misma condición humana y, por

* Profesor de la Universidad del País Vasco. Militante de la Coordinadora *Gesto por la Paz de Euskal Herria*. En la actualidad, y desde 2009, es Viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

¹ Diálogo en la película de Montxo Armendáriz, «El Silencio Roto».

consiguiente, similares a las prevalentes hace años. Otras son más propias de las circunstancias presentes y derivadas de la actual situación de relativa opulencia material y de cierta pobreza de sentido. Sin embargo, la sociedad vasca, y por extensión la española, ha venido padeciendo la afectación especial en su convivencia del terrorismo etarra, así como de las expresiones violentas y excluyentes por él generadas. Sobre un conflicto de matriz identitaria, que también existe en otras comunidades, se ha superpuesto el conflicto violento con consecuencias específicas sobre la convivencia.

No se puede negar que, como en Cataluña o en otras nacionalidades/regiones, una parte de la población vasca –una minoría– desea la independencia política o –un porcentaje significativo de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco y mucho menor en el caso de la Comunidad Foral Navarra– un encaje diferente dentro del entramado institucional español.

Pero si el problema no se puede resolver como se consiguió en la escisión de la antigua Checoslovaquia es, entre otras razones, porque en nuestra sociedad no existe el nivel de consenso que existía en Chequia y en Eslovaquia respecto de su separación. Nuestra socie-

dad es muy plural –como toda sociedad moderna por otra parte– y lo es especialmente en todo lo que tiene que ver son sus sentimientos identitarios. Las encuestas sociológicas vienen retratándonos como un conjunto de personas en las que las identidades española y vasca –o también la identidad navarra– forman parte, en proporciones diversas, de una muy clara mayoría. Así, por ejemplo, una media de las últimas encuestas daría como resultado que las y los ciudadanos de la CAPV se sienten:

- Sólo españoles, 9%.
- Más españoles que vascos, 9%.
- Tan españoles como vascos, 31%.
- Más vascos que españoles, 18%.
- Sólo vascos, 28%.

El conflicto violento surgió y pervivió por la absolutización de una de estas identidades hasta convertirse en identidad asesina. La solución que se va abriendo camino exige la aceptación progresiva del carácter mestizo de la sociedad vasca frente a la pretensión reduccionista, asociada a la pre-existencia de un pueblo con derechos históricos irrenunciables, sea fruto esta pretensión de la creencia en los derechos asociados a la antigüedad de un pueblo oprimido o lo sea, con pretensiones más ilustradas, como resultado de un sen-

timiento identitario fuerte compartido en el presente por parte de la población.

Por consiguiente, defender el principio de ciudadanía y la necesidad de conjugar identidades complejas, múltiples, no excluyentes y enriquecedoras es una tarea de enorme importancia.

Aparece aquí un reto que no es exclusiva de la ciudadanía vasca. No cabe duda que las raíces profundas de la patología que dio lugar a la aparición del terrorismo en Euskal Herria tienen parentescos cercanos con las que subyacen a opiniones personales y públicas, así como a políticas concretas, relacionadas con la inmigración y tristemente actuales. Si las fronteras internas son de carácter psicológico, heredadas o adquiridas, y las que separan políticamente unos estados de otros son convenciones generadas por la historia, habrá que aceptar su condición de relativas y nunca olvidar que la dignidad de un ser humano está por encima de convenciones, por muy antiguas y queridas por nosotros que éstas sean.

Otro desafío importante lo constituye la superación de la perversa mezcla entre los conflictos políticos que cualquier sociedad humana contiene en su interior y un conflicto violento como el que he-

mos padecido desde hace casi cuarenta años en el País Vasco, en Navarra y, en buena medida, en toda España. El conflicto es inherente a la condición humana. Pero la resolución de los conflictos se puede y se debe abordar con un respeto exquisito de los derechos humanos fundamentales de toda persona. La pretensión de vincular, como causa y efecto ineluctables, una pretendida situación de conculcación de los derechos del pueblo vasco a su identidad y a su autodeterminación –más recientemente se ha utilizado otro lenguaje: derecho a decidir y territorialidad– al necesario recurso a la violencia terrorista, no tiene ninguna justificación. Menos aún en una sociedad como la vasca o la española con una democracia perfecta, pero homologable a la de países del entorno. Y, sin embargo, el final de décadas de violencia ha llegado más por planteamientos utilitaristas que desde la aceptación de principios éticos fruto de algún tipo de conversión por parte de los victimarios y sus corifeos.

Esa vinculación entre una lectura agónica de la presente situación del pueblo vasco y el asesinato, la extorsión y la amenaza ha sido la consecuencia de la decisión de personas y colectivos concretos. En ningún caso se ha correspondi-

do con un nexo causal inevitable. Desde una ética irrenunciable, ese nexo siempre ha sido intolerable y, por ende, debe ser denunciado, aun hoy cuando parece asistirse al final de la barbarie. Consecuentemente, con ETA sólo se podrá dialogar para que finalmente confirme que desiste con carácter definitivo de la estrategia violenta y entregue o destruya sus armas. De los conflictos sociales y políticos que la sociedad vasca contiene –algunos con ciertas especificidades, otros comunes con sociedades similares– sólo están legitimados para el debate resolutivo sobre ellos quienes representen en cada momento de forma democrática a la ciudadanía. Sin esta condición malamente se construirá una convivencia sobre bases saludables.

En este contexto creo que puede suponer una profundización en la calidad de la democracia el buscar el equilibrio más adecuado, que en cada momento sea posible, entre intentar responder a posibles demandas mayoritarias expresadas democráticamente por las sociedades de las naciones, nacionalidades o regiones que forman parte de España y el respeto que nos deben merecer siglos de convivencia que se han traducido en toda una red de relaciones de todo tipo entre esas mismas partes.

Una convivencia deteriorada

Se han cumplido ya setenta y cinco años del comienzo de la última guerra civil en España y aún hoy seguimos discutiendo sobre lo adecuado de medidas contempladas en la Ley de la Memoria Histórica o sobre el futuro del Valle de los Caídos. Ello nos permite vislumbrar los efectos de largo alcance que sobre la convivencia tienen los conflictos violentos. No cabe duda de que el terrorismo etarra, y la violencia con él concomitante, se ha mantenido en una escala que nada tiene que ver con aquellos tres años de guerra tras el levantamiento militar contra la II República. Pero una parte del lodo acumulado a lo largo de las cuatro décadas de violencia que ahora parecen finalizar puede encontrarse en las heridas abiertas por aquel enfrentamiento que venció sin convencer (el vasco Unamuno *dixit*) y aplastó cualquier disidencia con rigor extremo y sangre.

Traigo a colación lo anterior para poner de manifiesto que la fractura social exacerbada por ETA conecta con la crisis del Antiguo Régimen que provocó durante el siglo XIX las guerras carlistas, con especial impacto en el País Vasco y Navarra o, si se prefiere, en Euskal Herria. Esta herencia ha gravitado

sobre nuestra sociedad de maneras diversas hasta que en los años cincuenta la salvaje represión franquista movilizó a unos pocos jóvenes vascos que comenzaron una triste historia. Como casi siempre que se pretende utilizar la violencia como partera de la historia se acaba ejerciéndola habiendo perdido su control y sacrificando en su altar a víctimas inocentes.

Las dos consecuencias más graves que estas décadas de terrorismo han provocado en la sociedad vasca tienen que ver con dos fallas superpuestas. La primera y más grave ha sido aquella construida de forma consciente por el mundo que ha ejercido o dado cobertura a ETA. Tras la muerte de Franco, España experimentó un proceso de democratización al que acompañó otro de carácter social que nos homologó con la situación de los países vecinos. Ante esta evolución, el entorno de ETA se fue haciendo cada vez más impermeable e intolerante. De alguna forma la ruptura de la comunicación con el resto de la sociedad facilitaba el orden interno, eliminando a los discrepantes, y evitaba que reflexiones éticas fundamentales cuestionaran el credo compartido. La llegada del Estatuto de Autonomía, y con él de instituciones nuevas como la policía autónoma, fueron ocasión privilegiada para

la escenificación de esa ruptura. En más de una familia o de una cuadrilla de amigos, el que alguien ingresara en esa nueva policía (Ertzantza) provocó rupturas entre quienes apoyaron o respetaron esa decisión y quienes, cercanos al abertzalismo radical, condenaron y estigmatizaron a esas personas.

He aquí un elemento central de la peculiaridad de la fractura generada por la violencia en la sociedad vasca: mientras en otros lugares, como Irlanda del Norte, el conflicto se alimentó del enfrentamiento entre dos sociedades distintas con identidades fuertes a las que difícilmente se podía escapar, entre la ciudadanía vasca el conflicto ha atravesado familias, antiguas relaciones de amistad nacidas en la infancia o la juventud, organizaciones sociales o incluso comunidades eclesiales. Cuando tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco algunos medios de comunicación españoles clamaban por el aislamiento de los violentos, en el País Vasco éramos conscientes que lo fundamental de esa separación ya estaba establecido y que ir más lejos era casi imposible. Sirva de ejemplo familias convocadas por sus mayores a compartir mesa y mantel en las fiestas navideñas y en las que los temas relacionados con el conflicto vasco o la política

en general tenían que ser cuidadosamente evitados para no acabar con el mínimo que exigía el respeto a padres o abuelos. O asistir a actos públicos de denuncia tras un atentado con la correspondiente contra manifestación y descubrir a miembros de la misma familia a uno y otro lado de la plaza.

La otra fisura, menos importante, ha tenido que ver con la contaminación que la violencia ha generado en el debate político. Estoy convencido que las relaciones entre el mundo nacionalista vasco y el mundo constitucionalista han resultado más difíciles y crispados por culpa de la patología violenta. Y no sólo porque el *metaproblema* de la violencia consumiera energías que hubiera sido posible dedicar a otros problemas, sino porque, incluso con la mejor voluntad en ocasiones o con ciertas dosis de ventajismo en otras, las recetas para atajar el problema del terrorismo han contaminado discursos políticos y han complicado la construcción de consensos básicos en nuestra sociedad. La mayor afectación ha sido, sin duda, la de la violencia de persecución con la que ETA y su mundo han convertido en dianas humanas a políticos, jueces, intelectuales, servidores públicos, periodistas, empresarios, etc. Desde la radical conculcación del derecho a la vida

asesinando hasta la que han padecido algunos miles de personas que han vivido escoltadas durante años hay todo un elenco de situaciones que han dejado heridas con traslaciones social y política evidentes.

Pero, además, el mundo que ha cobijado en su seno a la violencia terrorista ha provocado otro daño nada despreciable. Entre las personas que han transitado entre la infancia y la edad adulta en el País Vasco y en Navarra durante los últimos veinte años de nuestra historia, un número, proporcionalmente pequeño pero nada despreciable, fue captado en su adolescencia por ese mundo. De ellos y ellas una parte muy importante abandonó su proceso formativo y se ha socializado en un medio cerrado, fanatizante y artificial. Sus posibilidades de acceso al mundo del trabajo son, en cualquier coyuntura y aún más en la actual, enormemente difíciles y, sin embargo, precisan de oportunidades nuevas como las que ese mundo les negó para reinsertarse a la convivencia democrática. Es este uno de los retos fundamentales en el rearme ético que nuestra sociedad precisa recorrer.

Por último, también conviene citar que la historia de sufrimiento provocada por ETA y sus apoyos ha generado en parte de la ciuda-

danía española reacciones que precisan de alguna corrección. La condena del inaceptable terrorismo ha ido acompañada en no pocas ocasiones por expresiones de un nacionalismo español un tanto rancio y excluyente. En algunos casos, afortunadamente excepcionales, se ha llegado a mostrar cierta comprensión –o incluso justificación– ante las actuaciones ilegales e ilegítimas de las cloacas del estado. Bueno será que de lo vivido aprendamos a ser más tolerantes con quien piensa diferente e intolerantes con toda expresión de intolerancia intolerable.

Una convivencia que debe ser sanada

De cara al futuro una primera reflexión puede relativizar posibles análisis tremendistas. Una de las características del conflicto vasco es que, pese a las tragedias individuales y familiares que ha provocado, la inmensa mayoría de la ciudadanía no ha visto comprometido su nivel de vida o su confort como consecuencia del terrorismo. La mayoría lo ha condenado, especialmente en los últimos tiempos; una parte nada despreciable se ha movilizado públicamente superados miedos y desconciertos iniciales; pero, más allá de respetables análisis prospecti-

vos que han pretendido evaluar los costes económicos del terrorismo, y sin frivolizar sobre el impacto que éste ha tenido en familias rotas por los atentados o que decidieron abandonar el País Vasco para poder vivir sin la amenaza permanente de la barbarie excluyente, creo que puede afirmarse que muy poca gente en nuestro país se ha quedado sin vacaciones o ha tenido que suspender una cena familiar o amical por culpa del denominado conflicto vasco.

Y, sin embargo, la convivencia ha sido afectada significativamente. El esperado fin del terrorismo puede generar una situación a corto plazo, que en parte ya se está viviendo, en la que pueda llegar a parecer que toda la historia de sufrimiento acumulado ha quedado amortizada con rapidez, salvo para quienes fueron afectados directamente por la violencia o tienen a alguien cercano en la cárcel.

He aquí el gran riesgo a evitar. Puede que el final de la violencia terrorista y, esperemos que más pronto que tarde, la desaparición de ETA posibiliten una rápida normalización y la tan deseada convivencia en paz. Pero conviene que esa paz no sea la de la desmemoria y la cicatrización en falso de las heridas causadas. En primer lugar, por respeto al dolor de las víctimas, a las que no debemos

cargar con mayor peso que la losa de lo estrictamente irreparable. En segundo, porque lo que no se sana a tiempo suele pasar factura más tarde. Y en tercer lugar, porque no se puede desaprovechar esta oportunidad para crecer como una sociedad cada vez más alejada de los métodos violentos, y más comprometida con la resolución no-violenta de cualquier conflicto a que deba enfrentarse.

Para ello se precisa continuar exigiendo a quienes han venido dando cobertura a la violencia de ETA el que den pasos decididos hacia el reconocimiento del mal causado y acepten la ilegitimidad de la estrategia violenta. Será un camino que no recorrerán todas las personas que sería bueno que lo transitaran, pero como sociedad no se puede renunciar a este objetivo. El éxito ya está garantizado con los que ya han recorrido ese camino y los que lo han iniciado, aunque debemos trabajar para que cuantas más personas experimenten que el cese de la violencia no puede asociarse exclusivamente a consideraciones tácticas o estratégicas, sino a la asunción de planteamientos éticos básicos. Como también se deberá probar en el próximo futuro que nuestro ordenamiento jurídico penal cree en la reinserción y no el castigo como algo con valor por sí mismo.

La herencia recibida gravita también de formas más sibilinas sobre nuestra convivencia social. Determinados claustros de profesores en escuelas, colegios e institutos también han vivido en su seno dinámicas centrífugas asociadas en este conflicto. No son una rara excepción los centros educativos en los que se podía abordar con absoluta serenidad casi cualquier otro conflicto social, cercano o lejano, menos el que se ha vivido de cerca en nuestras calles por causa del terrorismo. Queda, por tanto, la tarea pedagógica de que profesorado y alumnado aprovechen los aciertos y los fracasos del pasado como aliciente para dinámicas educativas que generalicen la cultura de los derechos humanos, la empatía para con toda víctima y la no-violencia.

También quienes no hemos dado cobertura activa al terrorismo estamos llamados a algo más que a reivindicar y facilitar la conversión de los cómplices del terror. El rearme moral de nuestra sociedad debe comenzar por el reconocimiento de la insuficiente reacción cívica que durante demasiado tiempo mostramos, así como los graves déficits para con las víctimas de esta historia dolorosísima. Algunos reaccionamos tarde, a otros todavía se les esperaba cuando parece haber llegado el anhelado fin de ETA y to-

El reto de reconstruir la convivencia en Euskadi

dos deberíamos comprometernos como personas y como ciudadanos a crecer en madurez y responsabilidad para que este tipo de patologías sean rápidamente rechazadas si intentaran regresar a nuestro cuerpo social. Ello se compadece mal con demasiado apresuramiento o con atajos fáciles. No se trata, en ningún caso, de cultivar la mala conciencia de manera pesimista y hasta masoquista. Por el contrario, se trata de activar nuestras mejores energías personales, familiares, institucionales..., al servicio de

una convivencia en paz y cada vez más plena.

Las comunidades eclesiales están especialmente llamadas a un proceso de estas características. La conversión a los valores del Evangelio exige que éste pase no sólo por nuestro bolsillo (austeridad para compartir) o por nuestro trabajo, sino que también ha de relativizar esas pulsiones identitarias que sacralizadas acaban siendo inmunes a los valores predicados y vividos por el Señor Jesús. ■